

I CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS

- 1996 -

MATERIALES DE TRABAJO PREPARATORIO N° 1, 2 y 3

ARCHIVO
CENDOC
DEPATF



**Aportes para la construcción
de una nueva estrategia de
poder en la Argentina**

I CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS

- 1996 -

Material de Trabajo Nº 1

UNA NUEVA ETAPA ECONOMICA Y POLITICA

EL SIGNIFICADO DE LA HIPERINFLACION

Es preciso inscribir el proceso de consolidación organizativa de nuestra Central, en el cambio de etapa económica, política y cultural que vive la Argentina. A efectos de explicitar esto parece conveniente recordar el significado que define el momento inaugural del presente período configurado por el proceso hiperinflacionario de los años 1989 / 1990.

En nuestra lectura la inflación es pensada comprendiendo que detrás de cada precio de la economía hay un actor social concreto. El diferente movimiento de los precios refleja el conflicto instalado en la sociedad respecto del reparto de los ingresos que esa misma sociedad genera. Obviamente, en ese conflicto no todos los actores participan de igual modo o con las mismas posibilidades. Es el lugar que ocupan en el mundo de la producción, del comercio y las finanzas lo que determina la capacidad de transformar sus expectativas en concretos movimientos del mercado.

Indudablemente no es lo mismo la capacidad de los trabajadores para defender su trabajo y su empleo que la de un grupo empresario para fijar su precio. Sintéticamente entonces, la inflación refleja en el terreno del mercado el conflicto de los diversos sectores sociales por el reparto. En este marco, el Estado a través de su política fiscal y monetaria participa en función de la constelación de intereses que lo gobierna (regresividad o progresividad tributaria; asignación del gasto; comportamiento de sus empresas; expansión o contracción de la moneda; organización del sistema de crédito; asignación del mismo; etcétera).

Normalmente entonces, los momentos de aceleración inflacionaria pueden concebirse como expresión de la contienda social por la apropiación del ingreso. En la Argentina definen también -es lo ocurrido en 1975, 1984 y 1989- los prolegómenos de intervenciones políticas destinadas a alterar o convalidar las bases estructurales sobre las que se asienta la pauta distributiva.

1989: UNA SITUACION DISTINTA

Los episodios de hiperinflación de principios y fines de 1989 no escaparon a esta regla. La aceleración de la puja distributiva fue el prolegómeno de un importante cambio estructural en el modelo de acumulación. Sólo que en esta ocasión, y a diferencia de casos anteriores (1975), la disputa estuvo exclusivamente circunscripta a los sectores dominantes: grupos económicos-banca acreedora. A diferencia de lo ocurrido en 1975, donde a la devaluación instrumentada por Celestino Rodrigo le siguió una movilización social y la negociación colectiva del gremio industrial más poderoso pautando un incremento salarial que licuó la modificación cambiaria y su impacto en los precios, la última hiperinflación reflejó la disputa salvaje en el terreno del mercado entre las facciones más poderosas. Los grupos económicos disminuyeron la oferta de divisas, retaceando la liquidación de exportaciones a

un tipo de cambio inferior al real (expresado en el desdoblamiento del mercado vigente en ese momento); en tanto la banca acreedora incrementó sensiblemente la demanda de dólares, procurando cobrar (vía presión cambiaria) lo que nuestro país no transfería desde abril de 1988. Esta feroz pelea por la posesión de las divisas disponibles pone de relieve un conjunto de elementos cuyo análisis permite caracterizar el marco en que comienza a desarrollarse la ETAPA MENEM.

En principio, aparece con claridad que los ajustes recesivos de corto plazo -receta clásica del FMI- no cumplían ya con su objetivo central: pagar la deuda externa. Esto se verifica indudablemente en el caso argentino, donde el saldo favorable de la balanza comercial acumulado en el lapso 88/90 fue de U\$S 17.300 millones, mientras que el pago de intereses de la deuda -interrumpidos desde abril 88 a abril 90- sólo alcanzó a U\$S 400 millones.

Frente a esta situación, la banca acreedora desplazó el peso del endeudamiento externo de la mesa de negociaciones al mercado cambiario local, en un intento de arrebatar parte del superávit comercial a sus dueños, generando una demanda real y potencial de divisas imposible de satisfacer; lo que se tradujo en saltos incontrolables en la cotización del dólar.

La reunión conjunta del Banco Mundial y el FMI realizada en abril de 1988, marcó una clara preeminencia del primer organismo en cuanto a la necesidad de forzar reformas estructurales en los países endeudados con los siguientes fines:

- acelerar la inserción de América Latina en el ordenamiento económico internacional post "guerra fría".
- recuperar el capital prestado convirtiendo los títulos de deuda en activos de cada país.
- inducir políticas estatales que garanticen un nivel de pagos adecuados al ajuste exportador realizado, superando la situación antes descrita.

Los objetivos resultantes de esta reunión y la imposibilidad del gobierno de Alfonsín de cumplirlos, constituyeron los factores decisivos en el cambio del comportamiento de la banca acreedora, desencadenando el "dolarazo" del 6 de febrero de 1989.

En otro orden, es imprescindible detenerse en los motivos por los cuales una elevación del tipo de cambio arrastra inmediatamente una suba de precios de igual o inferior magnitud con independencia del impacto que el salto cambiario signifique en el costo de cada producto.

Los grupos empresarios formadores de precios en el país valúan sus activos y tasas de rentabilidad en moneda dura. Este comportamiento, claramente "internacionalizado", es efecto de la creciente desvinculación de una masa sustantiva de sus excedentes del circuito económico local.

Indudablemente quien posee inversiones (productivas, comerciales o financieras) en diversas regiones del mundo debe unificar su valuación para cuantificar correctamente los rendimientos que producen y establecer decisiones y estrategias en consecuencia.

Por ende, en el mantenimiento y realización -conversión a dólares- de las tasas de ganancia empresarias (y no en la estructura de costos de los productos) residen las causas de las tensiones inflacionarias, que asociadas a escaladas del tipo de cambio, vivimos en la última década. La anarquía de precios relativos resultante del proceso señalado y que ha sido característica de la economía argentina posterior a 1976, encuentra explicación en estos comportamientos. La internacionalización y el predominio de la valorización financiera signaron el esquema de acumulación de los grupos locales más importantes que encontraron en este anárquico movimiento de los precios el modo de optimizar sus beneficios.

Así las cosas y retomando lo explicitado en los párrafos anteriores, la hiperinflación argentina reflejó en realidad la disputa salvaje en el terreno del mercado y los precios (a costillas del conjunto social) entre las facciones más importantes del capital, sin que el Estado pueda fijar norma alguna en dicho conflicto. El grado de colonización que los sectores más poderosos del capital habían consumado sobre el Estado hacia fines de la década del 80 imposibilitaba que el mismo asumiera un papel ordenador y transformó a la quiebra fiscal en el signo más elocuente de la crisis. El Estado estaba atravesado por el propio conflicto. La convalidación de una absoluta regresividad tributaria, la cuantía alcanzada por los subsidios a los distintos conglomerados empresarios, el peso del endeudamiento externo e interno en el gasto público, el carácter de su intervención regulatoria en los mercados y el accionar de sus empresas eran reflejo de esta situación y demostraban que al iniciarse la gestión de Menem la privatización del Estado ya estaba consumada habiendo perdido éste su rol de "expresión de lo público".

Si la inflación refleja un conflicto, la hiper argentina supuso una batalla entre los poderosos librada en el terreno del mercado y tendiente a resolver las jerarquías que cada uno ocupaba en el proceso de reproducción del capital de la economía argentina. Cuando las transferencias del Estado argentino hacia los principales grupos empresarios puso en crisis la capacidad de éste para garantizar los pagos externos, se abrió paso la espectacular contienda inflacionaria.

Definido esto, todo planteo o plan de estabilización supone instaurar un orden, el debate se ubica en el terreno del tipo de orden que tienda a establecerse. Cuando el Estado (en nombre del conjunto) define las claves del nuevo orden, los resultados son de un tenor. En el caso argentino no fue así. En tanto el Estado estaba atravesado por los contendientes principales de la batalla inflacionaria, la resolución del conflicto se consumó a través de una tregua donde la "prenda de paz"

LA HIPERINFLACION DEL '89 MARCO UNA NUEVA ETAPA DE ACUMULACION DE LA ECONOMIA NACIONAL, SIN POSIBILIDAD DE INTERVENCION DEL ESTADO NI DE LOS TRABAJADORES.

fue justamente el desguace de la infraestructura económico-empresarial del Sector Público. Nótese que en esta interpretación, y a diferencia del discurso oficial que suele contrastar el actual momento de estabilidad con el pasado hiperinflacionario, la hiperinflación se transforma en fundante del tipo de orden instaurado a posteriori de la misma.

LA POLITICA ECONOMICA EN LOS NOVENTA

Tres factores definieron el cuadro en el que debe inscribirse la política económica argentina. Uno remite al plano interno y los otros dos definen las particularidades del escenario internacional. En lo interno, las privatizaciones ocuparon, como señaláramos, un rol clave en la resolución de la disputa inflacionaria. Por un lado, implicaron ingresos para el Estado y permitieron, por lo tanto, recomponer la capacidad de pagos externos de nuestro país. Asimismo la instrumentación del régimen de capitalización de la deuda en el proceso privatizador permitió la cancelación anticipada del capital adeudado. Ambos aspectos tendían a restaurar la confianza de los bancos extranjeros. Por otro lado, las privatizaciones lograron también sustituir por lo menos en parte, los subsidios que hasta 1989 caracterizaron el ciclo de acumulación del capital interno más concentrado, transfiriéndole directamente el control de los principales mercados de la economía argentina.

Estos movimientos, ingreso de fondos frescos a las arcas públicas, cancelación del capital adeudado y reducción de subsidios, fueron pilares fundamentales de la modalidad escogida para formular un nuevo acuerdo al interior del bloque dominante estructurado en torno al objetivo de recomponer el superávit fiscal (expresión de capacidad de pagos) sin afectar la tasa de ganancia y el crecimiento patrimonial de los conglomerados empresarios más importantes del país. En consonancia con este objetivo de maximizar la capacidad de transferir recurso al exterior es que debe interpretarse el sentido de la paridad cambiaria $US\$ 1 = \$ 1$. En tanto el Estado cobra en $\$$ su recaudación y paga su deuda en moneda dura, el valor que estipula la Ley de Convertibilidad maximiza los pagos externos de la economía argentina. Es en este nuevo acuerdo al interior del bloque dominante donde deben buscarse las razones de la estabilidad alcanzada.

En lo externo, dos aspectos sirvieron para reforzar esta situación:

a) La inscripción definida de la Argentina en el marco de las políticas fundamentales de los EEUU para el continente latinoamericano. Son estas, el Plan Brady referido a la deuda con la Banca Internacional y la Iniciativa para las Américas en lo concerniente al comercio exterior. El Plan Brady implicó la reestructuración a largo plazo de la deuda contraída con la banca extranjera a fines de los 70, estableciendo un compromiso ineludible, cuyo incumplimiento deja sin efecto el acuerdo, basado en el pago periódico y sistemático de intereses y la cancelación del capital adeudado al cabo de 30 años, a través de una operación de

pase con bonos del tesoro estadounidense. De este modo se cumplió un doble propósito: regularizar definitivamente las transferencias hacia los acreedores externos por la vieja deuda y transformar nuevamente a la Argentina (más concretamente a sus principales grupos empresarios) en sujetos de crédito internacional. En lo referente a la Iniciativa para las Américas la recomendación básica de política económica hecha desde el norte, fue abrir la economía a efectos de transformar los mercados latinoamericanos en demanda para la producción norteamericana.

b) el cambio en el contexto internacional que a diferencia de lo que había ocurrido desde 1982, presentó desde comienzos de los 90 una abundante liquidez en el sistema financiero mundial.

La articulación entre estos tres factores: privatizaciones, políticas norteamericanas sobre América Latina y abundancia de capitales en el sistema financiero internacional, definen el marco en que se inscriben las políticas planteadas por el gobierno de Menem y las características del período 1991-94.

El Plan Brady abrió la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento de los principales grupos de la Argentina, esto empalmó con el ingreso de capitales del exterior fuertemente atraídos por la venta de empresas públicas y la inversión asociada. Asimismo el ingreso de fondos alimentó un ciclo expansivo de la actividad económica interviniendo en este proceso la Iniciativa de las Américas vía financiamiento comercial y orientación del poder de compra de la Argentina hacia ese país. Ciertos datos confirman lo expuesto: entre 1992 -año de la firma del Brady y 1995, el ingreso neto de capitales del exterior fue de U\$S 31.828 millones de los cuales estimativamente el 56% se vinculó directa o indirectamente al proceso de privatizaciones. Por otra parte, las importaciones estadounidenses realizadas por la Argentina crecieron de U\$S 860 millones en 1990 a U\$S 4530 millones en 1994. Es conveniente destacar que la expansión de la actividad económica impactó elevando el nivel de la recaudación tributaria, lo cual sumado al aumento en los ingresos fiscales que proporcionaban las privatizaciones completó un cuadro de cierta holgura en las cuentas públicas.

Entre 1991 y 1994 se produjo entonces un ciclo ascendente de la economía fundado en el ingreso de capital externo asociado al boom privatizador. Esto sustentó una fuerte reactivación basada en el consumo a crédito de bienes durables (construcción, automotores, electrodomésticos, textiles, etc.) que elevó la recaudación del IVA permitiendo una elevación del gasto público (a valores corrientes) por encima del piso de 1989/90. Ciclo este que, en una sociedad golpeada por los episodios hiperinflacionarios actuó como un anestésico frente al desguace del Estado, el aumento del endeudamiento público, el debilitamiento productivo, la desindustrialización y el incremento del desempleo.

LA "PRENDA DE PAZ" EN PUJA ENTRE LOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIOS Y LOS ACREEDORES EXTERNOS FUE JUSTAMENTE EL DESGUACE DEL ESTADO.

PRIVATIZACIONES, PLAN BRADY Y ABUNDANCIA DE CAPITALES: LAS CLAVES DE LA ETAPA "EXPANSIVA" DEL PLAN. (1991-1994).

UN NUEVO ESCENARIO PARA LA POLITICA ECONOMICA

Desde mediados de 1994 y con mayor énfasis a partir del mal denominado "efecto tequila", la Convertibilidad ingresa en un nuevo escenario signado por el agotamiento de los dos factores que habían alimentado el ciclo expansivo 1991-1994. El fin del proceso privatizador (por lo menos de aquellas empresas más significativas) y el cambio que sufre el escenario internacional con un claro reflujo de los capitales a partir de 1995 decretan el fin del período descrito.

A efectos de caracterizar esta nueva etapa corresponde precisar los siguientes puntos:

- nueva relación de fuerzas al interior del empresariado;
- impacto del proceso recesivo, el desempleo y el ajuste sobre el gasto público;
- crisis política del modelo en vigencia.

Las privatizaciones han definido una nueva articulación donde participan ciertos grupos empresarios locales, el capital extranjero y los bancos transnacionales. Esta confluencia define la cúpula ganadora por excelencia. No obstante, los límites que plantea la situación financiera internacional decretaron que el mantenimiento de los pagos externos pasa a depender fundamentalmente de la equivalencia que se establezca entre el superávit fiscal y el saldo comercial favorable de la economía argentina.

Este último se logra con un mejor nivel de exportaciones y un menor nivel de importaciones. Dicha situación corre el eje del dinamismo de la economía nacional, desde el mercado interno hacia la salida al mercado mundial, favoreciendo aquellas producciones fundadas en ventajas naturales y aquellas que lograron articular su ciclo productivo con los procesos de apertura, privatizaciones y desregulación garantizando una sustantiva reducción de costos.

De más está decir que este proceso golpea de manera absolutamente desigual al conjunto del empresariado estableciendo niveles de tipo de cambio real diferenciales para los distintos productos. Bueno es agregar que puesta de cara al mercado mundial y en un contexto donde el impacto de la apertura sobre el sistema de precios (mayor aumento del índice de precios al consumidor que de los precios mayoristas) decretó durante el período 91-94 un crecimiento del costo laboral en dólares, la desarticulación del sistema de seguridad social (previsión y obras sociales) así como la absoluta flexibilización de las relaciones laborales (transformar a la fuerza de trabajo en un costo variable susceptible de ajustarse según el ciclo económico) pasan a ocupar un papel principal en la agenda de la política económica a partir de 1995. Tanto por el carácter eminentemente capital intensivo y aprovechador de renta natural que posee el sector exportador argentino, como por el descenso en las importaciones y la recesión que supone el ajuste comercial externo, el comportamiento descendente del mercado interno y

LA CUPULA GANADORA: ALGUNOS GRPOS EMPRE- SARIOS, EL CAPITAL EX- TRANJERO Y LOS BANCOS TRANSNACIONALES.

del nivel de empleo se transforman en las variables de ajuste del nuevo período.

Por otro lado, el logro del superávit fiscal se plantea tomando en cuenta las restricciones que la nueva cúpula del poder económico pos privatizaciones instaure. Estas son: en primer lugar, la necesidad de mantener un superávit fiscal acorde al nivel de compromisos que plantea el Brady (interés acreedor); y, en segundo lugar, lograrlo en base a una reducción del gasto público (fundamentalmente en provincias y municipios) de manera tal de no afectar la tasa de ganancia de los conglomerados más importantes (socios de los acreedores en las privatizaciones) a partir de criterios de progresividad tributaria.

El descenso en la actividad del mercado local, la política de reducción del costo laboral y un esquema fiscal que sólo descansa en la reducción del gasto decreta un movimiento de absoluta regresividad en el proceso económico. Movimiento que se potencia al extremo en el marco de una lógica perversa que combina: descenso en la actividad económica -descenso en la recaudación- descenso en el gasto público y, consecuentemente, mayor descenso en la actividad. Este mismo ciclo puede verse de este otro modo: reducción de los ingresos de la sociedad -achicamiento de los mercados por caída de las ventas- en un mercado más reducido se sobrevive por concentración, es decir, desplazando competidores -el mecanismo es la baja de los precios (deflación) -posibilidad de quienes tienen escala, capacidad financiera o mejor inserción- desplazamiento de los más débiles -más desempleo -menos ingreso -menos rentas- y así vuelve a reproducirse.

Resultan afectados por esta política las empresas grandes o chicas que direccionan su producción al mercado interno de demanda masiva; las burguesías provinciales con dificultades para colocar su producción en el mercado mundial y que perderán los subsidios en los que históricamente asentaron su ciclo productivo, grupos empresarios con inserción regional o de carácter nacional que no pudieron rearticular sus estrategias en el marco de la privatización, la apertura y la desregulación (Ej.: Massuh, Zorroaquin, Celulosa) y, por supuesto, el grueso de los trabajadores.

LA CRISIS POLITICA DEL MODELO

Realizadas las consideraciones económicas respecto a la etapa en cuestión cabe consignar el carácter de la crisis política en la que ingresa el modelo a partir de 1995. Paradojalmente, luego de una elección formidable realizada por el oficialismo el 14 de Mayo, aparecen dificultades manifiestas en la capacidad de profundizar los rumbos principales de la presente política. La novedad radica en que la fase abierta en 1995 pone en crisis la relación entre la propuesta económica y la capacidad de legitimación electoral del Partido Justicialista. Concretamente si el carácter expansivo que observó la convertibilidad entre 1991-1994 fue carta de triunfo electoral, este nuevo contexto donde la rece-

LOS "PERDEDORES" DEL MODELO NO SON SOLO LOS TRABAJADORES. PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE NO FORMAN PARTE DE LOS GRUPOS, LAS ECONOMIAS REGIONALES, EL MERCADO INTERNO E INCLUSO ALGUNAS BURGUESIAS PROVINCIALES FORMAN PARTE DE LOS DERROTADOS POR EL PLAN.

sión, el desempleo y el ajuste sobre el gasto resultan clave de una salida exportadora con escasa capacidad de tracción sobre el mercado interno, opera horadando la base electoral del partido oficial.

Las prácticas de carácter clientelístico que caracterizaron a los gobiernos provinciales conducidos por el Justicialismo e incluso por partidos provinciales que adhirieron a su oferta electoral nacional, son puestas en crisis por la necesidad del modelo de contraer el gasto a nivel provincial. Estas prácticas a su vez definían una modalidad de adhesión electoral fuertemente vinculada a la capacidad de la etapa 91-94 de promover formas precarias de empleo. En este marco la generalización de tasas de desocupación cercanas al 20% de la PEA cuestiona también la perspectiva electoral del Partido Justicialista.

Por último la estrategia de reducción de los costos laborales, directamente ligada a la reducción de los aportes patronales y la desregulación del sistema de obras sociales pone en crisis la adhesión del modelo sindical afín al proyecto oficial. En concreto, se trata de dos efectos de la etapa que operan sobre el Partido Gobernante. Por un lado, el desempleo haciendo estallar la adhesión electoral de las capas más postergadas y normalmente adherentes el Justicialismo. Por otro, el ajuste sobre provincias gobernadas por el oficialismo y el desfinanciamiento de las obras sociales que pone en crisis directamente la estructura institucional del partido gobernante habilitando los espacios de disenso e incluso fractura al interior del mismo. Como ejemplo de lo expuesto cabe destacar algunos hechos significativos.

Por primera vez en un Congreso Justicialista aparece una línea disidente capitaneada por un conjunto de gobernadores. Por otra parte, en las últimas semanas se observó un movimiento de mandatarios provinciales a escala regional (Patagonia) en un intento de expresar diferencias con el rumbo de la conducción económica nacional. Finalmente las elecciones en la Capital Federal pusieron de relieve las dificultades electorales del Justicialismo. Cuestión que debe inscribirse en el marco más general que incluye la derrota oficialista en la intendencia de Rosario, el fraude manifiesto expresado en la elección de Santa fe y la natural dificultad del Justicialismo para imponerse en la provincia de Córdoba. Estos elementos sumados a las dificultades que vive el dispositivo del gobernador Duhalde en la provincia de Buenos Aires amenazado por la reducción de los recursos fiscales de la provincia y el impacto del desempleo sobre el Conurbano, afirman el cuadro de crisis global que caracteriza al andamiaje político-institucional del oficialismo.

Debe diferenciarse esta crítica situación del Partido oficial de las crisis que vive normalmente la relación Menem-Cavallo.

Sin duda alguna afectada por el cuadro general previamente descrito, el voltaje de los conflictos entre la Rosada y el Ministerio descansan en la discusión de negocios concretos que frente a la rees-

tructuración de determinados mercados afectan los fondos de la corona reinante (Ej: correos, medicamentos, carne, etc.). Fuera de ese marco la disputa Cavallo-Menem se ubica en torno a la paternidad sobre el modelo en vigencia más que en disidencias respecto al rumbo elegido. El punto clave a identificar en todo esto radica en que la crisis del PJ con la fase actual de la Convertibilidad es de carácter estructural y carece de solución alguna. Más aun, la conflictividad que describe este escenario además de erosionar la base electoral del PJ, abre espacios para promover la lucha social y, frente a un Cavallo desgastado, pone en crisis el avance del modelo el cual desde mayo de 1995 ingresó una especie de inercia de la cual no ha salido.

Para ser claros la inercia no supone que el modelo no siga cobrando víctimas sociales en términos de destrucción de empleo y pérdida de ingresos. Simplemente expone los límites para su ajuste que indudablemente debe ser más salvaje y que se encuentra contenido en las leyes, decretos y pactos que promueven la denominada 2da. Reforma del Estado, el desguace de los Estados Provinciales y el recorte de gastos en el ANSES (Ley de Solidaridad Previsional, reestructura del PAMI, revisión de supuestas jubilaciones ilegales, etc.). En términos estrictamente económicos y de consistencia técnica del modelo convertible la presente situación descrita por la política oficial de crecimiento del endeudamiento externo ligado exclusivamente al financiamiento del déficit fiscal abre interrogantes respecto a las perspectivas futuras del plan. Hasta el momento del déficit existente resulta financiable ya que las razones del mismo descansan en la reducción de los aportes patronales (más ganancia empresaria) y el traslado de aportantes desde las Cajas Públicas de Previsión hacia las AFJP. Estos dos movimientos explican la expectativa de US\$ 5000 millones de déficit para el presente año y justifica la demanda de Cavallo al Congreso para ampliar el ya superado cupo anual de endeudamiento.

No obstante, esto no es sustentable en el tiempo en tanto supone un incremento en los niveles de deuda y en los compromisos de pago anual que de mantenerse pondrán en riesgo el propio cumplimiento del Brady. Por ende, la lógica del modelo exige que el déficit hoy vigente del sistema previsional (o lo que es lo mismo, el subsidio a la conformación del mercado privado de fondos de pensión) pueda financiarse apropiando recursos que hoy tienen otros destinos. Este es el marco donde se profundiza la presión sobre las provincias y el gasto en Salud, Educación, Justicia y Seguridad. Obviamente, respetando la restricción financiera que impone el no cobrarle impuestos a los ricos.

Otras aristas que acompañan el cuadro de crisis política hoy presente pueden situarse en dos niveles:

- el plano internacional
- los cambios perceptibles en el plano cultural.

EL AVANCE INMEDIATO DEL MODELO AFECTA DIRECTAMENTE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES Y LA BASE ELECTORAL DEL OFICIALISMO.

LOS CAMBIOS INTERNACIONALES

Respecto al primero de los puntos hoy existe un debate al interior mismo de los propios organismos internacionales respecto a los límites que exhibe el paradigma neoliberal para consolidar una nueva fase de crecimiento sostenido del capitalismo mundial. Las dificultades en este plano así como los efectos en términos de degradación del nivel de vida de las sociedades (no sólo subdesarrolladas) han colocado el problema de la gobernabilidad de los diferentes procesos en un nivel de importancia creciente.

Esta situación ha dado lugar a por lo menos tres discusiones nuevas en el escenario mundial:

- la necesidad de ejercer algún tipo de regulación supranacional sobre el movimiento del capital financiero.
- la necesidad de replantear el sistema político internacional y sus instituciones, más ligados a la etapa de la guerra fría que a las novedades del mundo posterior a la caída del muro de Berlín.
- la importancia creciente asignada al rol de las políticas sociales como factor indispensable de gobernabilidad frente a los efectos sociales que el desempleo propone en la nueva etapa tecnológica.
- * el rol de la lucha contra la "corrupción" como modo de hacer compatible la gobernabilidad con la demanda de equilibrio fiscal propia de la globalización económica.
- la revisión de los modelos de corte netamente neoliberal y fundados en estrategias de tipo de cambio fijo aplicados en los denominados mercados emergentes.
- un nuevo papel de la Iglesia a escala planetaria que, luego de su ofensiva principal sobre el comunismo, ha pasado a una revisión crítica cada vez más profunda de los efectos sociales impuestos por el modelo neoliberal capitalista.

Como es evidente, todos los aspectos mencionados reflejan puntos de cuestionamiento al ordenamiento político e incluso económico que expresa el gobierno. La imposibilidad de traducir esto en un respaldo concreto para iniciativas novedosas en la Argentina, no radica en la ausencia de este escenario sino en la debilidad del espacio opositor local. Esta debilidad por otra parte coexiste con una situación de transición a escala mundial donde el paradigma liberal-democrático esgrimido como destino único de la humanidad luego del derrumbe socialista, presenta fisuras inocultables pese a que aún no aparecen cuerpos de pensamientos completos y estrategias políticas definidas que efectivamente expresen un recambio explícito al interior del modelo capitalista.

UN MODELO QUE NO CIERRA

En el plano cultural, la Argentina del terror, la democracia construida bajo la amenaza permanente del genocidio, la hiperinflación y el desempleo, también muestra novedades entre 1991 y 1993 ya no hay

expectativas comunitarias respecto a que en el marco del rumbo oficial pueda haber respuesta a las necesidades más elementales de la sociedad argentina. Hay una nueva tensión entre sobrevivencia y dignidad en torno a la cual se concentra un nuevo desafío para la práctica política en nuestro país. Hasta 1994 en el marco del ajuste expansivo la sobrevivencia primaba sobre la dignidad en tanto la primera aparecía asociada a la vigencia y mantenimiento del modelo convertible. Hoy, en el marco del desempleo estructural, el crecimiento de la pobreza y las restricciones fiscales crecientes, la sobrevivencia comienza a divorciarse de la vigencia del modelo. Ciertamente es también, que no aparecen aún frente a la sociedad alternativas que demuestren fortaleza y vocación para conducir una nueva etapa, pero el cambio en el paradigma cultural está presente. La disolución de los núcleos de sentido que le otorgaron primacía al paradigma neoliberal es hoy un proceso en franco desarrollo.

Lo descrito debe entenderse en términos de oportunidad y no de triunfo inexorable. De más está decir que la ausencia de construcciones políticas que puedan vertebrar y canalizar la demanda social asuma características más propias de la degradación comunitaria que de la transformación social. El crecimiento de la violencia y de la inseguridad pública pueden leerse irónicamente como mecanismo no tradicionales de transferencias y redistribuciones de ingreso por mano propia frente a la ausencia de políticas públicas en la materia.

El contexto de crisis política por la que atraviesa el modelo vigente debe inscribirse en el marco de un conjunto de tendencias estructurales que han caracterizado el sistema político-partidario a partir de 1989.

Tendencias que en el marco de los triunfos sistemáticos del oficialismo pasaron muchas veces desapercibidas. En este sentido ocurrió en el terreno político lo mismo que en el plano económico. El auge de la Convertibilidad 1991-1994 permitió disimular el conjunto de deficiencias estructurales y de debilitamiento progresivo que vivió la economía argentina.

LOS CAMBIOS EN LA POLITICA

En términos políticos vale la pena señalar que desde 1989 se observan con claridad los siguientes fenómenos:

a) Crisis de Representación

Una de las características centrales de la etapa inaugurada tras la asunción del gobierno por parte del Presidente Menem, es el vertiginoso incremento del ausentismo electoral y del voto en blanco. En 1989 el ausentismo ascendía a 2.935.375 electores. En mayo de 1995 asciende a 4.400.000. Esto implica que 1.464.625 personas más rechazaron todo tipo de oferta partidaria. Asimismo, en tanto los votantes en blanco llegaron a los 800.000 sufragios, el no a la oferta político-partidaria asciende a 2.264.625 electores. Cifra esta que evidencia niveles cre-

cientes de desencanto ciudadano frente al proceso democrático.

b) Quiebre del bipartidismo

Si en 1983 el PJ y la UCR capturaban el 86% de los votos emitidos, el sólo señalamiento de que la segunda fuerza en los recientes comicios es una nueva opción política (FREPASO) refleja la envergadura de la modificación electoral producida.

c) Paulatino cambio en la base electoral del Partido Justicialista

Se observa un movimiento por el cual el PJ pierde progresivamente votos en las zonas populares y suma apoyos en las zonas de mayor poderío económico.

Probablemente sea la Capital Federal la que con más claridad expresa esta nueva configuración. Prácticamente la mitad de los votos que recibe el PJ en el distrito proceden de ex votantes de la Unión de Centro Democrático, fuerza que ha mermado su caudal de forma casi absoluta y que apenas lo ha recompuesto en ocasión de la reelección como diputado nacional del capitán ingeniero Alvaro Alsogaray. Lo señalado para el distrito capitalino se observa (de manera más tenue) en el conjunto del país.

De hecho, un solo señalamiento permite apreciar la decantación de votos que sufre el Partido Justicialista. Si comparamos los votos obtenidos por Menem en 1995 (aprox. 8.300.000) con los obtenidos en 1989 (7.868.475), observamos una estabilidad en el total de sufragios, pero podemos intuir un cambio en su composición. De hecho, los votos que la UCD obtuvo en 1989 (aprox. 1.000.000) y los de los Partidos Provinciales en ese mismo año (aprox. 1.500.000), no se inclinaron por el PJ. Optaron por opciones propias por apoyar al candidato de la UCR. Esto indica que el PJ mantiene aproximadamente la misma cantidad de votos pero con más de 2.500.000 sufragios aportados por fuerzas de nuevo origen. Estos compensaron la pérdida de votos propios del Partido Justicialista, el cual mantenía en 1995 aproximadamente 5.800.000 sufragios.

d) La encrucijada de la oposición

El predominio electoral del Justicialismo se construyó sobre la base de mantener un alto grado de adhesión de los sectores más castigados. Esto se observa en la importancia que tuvo el comportamiento del Conurbano Bonaerense en materia electoral. El 80% de la diferencia que el PJ realiza respecto a la segunda fuerza electoral se obtuvo en la Provincia de Bs. As.. Asimismo, el 80% de esa diferencia la logró en la zona del conurbano bonaerense con una implantación mayor aún en el segundo cordón del mismo (el más pobre). Cabe consignar que este predominio sobre votantes que priorizan la sobrevivencia cotidiana descansa en tres aspectos:

- el impacto de la estabilidad vis a vis el efecto de la hiperinflación.
- un claro activismo fiscal con una formidable asignación de recursos en esa zona de la Argentina, compatible con la etapa e auge de la

Convertibilidad.

- las debilidades o límites propios de la oposición.

Sobre este último punto vale la pena detenerse.

Puede decirse que la construcción dominante del perfil opositor en el marco del primer gobierno de Menem se asentó en la primacía casi excluyente del paradigma democrático. Pero sobre un concepto de democracia fuertemente articulado con la defensa del Estado de derecho y los límites que al mismo imponía la forma de gestión del aparato de Estado propia del menemismo. La concentración de funciones en el Ejecutivo, la subordinación del poder parlamentario y judicial, la desarticulación de los organismos de control público y la corrupción como modo de comprar voluntades fueron los rasgos elegidos como claves de la crítica por el discurso opositor. Esto, acompañado de formas de construcción política predominantemente mediáticas, escasamente articuladas en términos organizativos y con dificultades para intervenir en los conflictos concretos, permitió que esa estrategia opositora (que atravesó el arco partidario y de las organizaciones sociales) encontrara fuertes dificultades para intervenir en el devenir político de los sectores populares. El final del primer gobierno de Menem muestra un predominio electoral que evidencia a un oficialismo capaz de integrar una alianza entre los más pobres y los más ricos, y una oposición dividida en dos con un patrón de implantación social similar centrado en los sectores medios urbanos, disputándose los votos entre sí y sin lograr afectar por lo menos seriamente la base electoral propia del Justicialismo.

Las dificultades de este escenario para la oposición son dobles:

-en primer término no logra estructurar una representación policlasista y que atraviese por tanto a los diferentes sectores sociales. Reproduce un difícil escenario de compartimentación en la representación política de los principales conglomerados sociales.

-al no lograr integrar en su representación a los sectores más castigados transforma en quimera una experiencia política gobernable de transformación social.

Señalamos anteriormente que este paradigma de construcción opositora centrado en la cuestión democrática y fundamentalmente del Estado de Derecho no se restringió sólo a una fuerza política, sino que atravesó todo el espinel partidario y a las propias organizaciones sociales.

Probablemente la expresión manifiesta en el plano partidario de la transversalidad que aquí exponemos haya sido la experiencia del molinos que mostrara a dirigentes de la UCR, del partido Justicialista y de otras experiencias confluyendo en un "bosquejo político nuevo", antecedente del actual FREPASO.

En el plano de las organizaciones sociales, la cuestión del Estado de Derecho y la democratización, abrió brechas en la Iglesia (EJ: Monseñor Laguna), en el campo sindical (EJ: CTA) e incluso a nivel militar (EJ: Balza).

En este sentido, puede plantearse que el paradigma democrático fue la modalidad dominante en la construcción opositora correspondiente al ajuste expansivo acompañado de formas institucionales de concentración de poder político que caracterizaron al gobierno menemista.

Si bien la forma democrática involucró a partidos y organizaciones sociales, las características expansivas del ajuste económico pusieron límites a las estrategias de articulación entre las experiencias de organización social y comunitaria y aquellas de corte institucional y partidario.

El cambio en la etapa económica y política que caracterizamos en puntos anteriores, modifica sustantivamente los términos de la construcción opositora.

Con claridad, el rostro recesivo de la actual fase de la convertibilidad coloca como eje del paradigma opositor la capacidad de politizar la demanda social en torno a las aristas más graves que la crisis exhibe. Entre ellas, el desempleo aparece como el rasgo más preocupante y profundo de la etapa, y es asumido crecientemente por todo el abanico institucional como la matriz socio-política de la discusión con el modelo neo-liberal.

Asimismo, los efectos de implosión que inducen en la base electoral del PJ y en su estructura institucional los ejes del ajuste en curso, abren espacio para la ruptura del consenso menemista.

La última elección en Capital Federal exhibe la aparición de una nueva fuerza política que compite con la misma base electoral del partido justicialista. Es el caso de Nueva Dirigencia, que en una elección importante logra especial inserción en las zonas de altos ingresos y en las de bajos recursos. Es decir, reproduce y divide la implantación electoral del justicialismo. Por otra parte, el FREPASO y sus liderazgos emergentes vuelven a demostrar una implantación similar a la de la UCR con una notoria disminución de su caudal electoral en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. Las tendencias estructurales vinculadas al ausentismo y el voto en blanco, equivalen prácticamente a los votos que logró Gustavo Béliz.

De proyectarse al plano nacional una experiencia como la de Béliz en capital, que discuta la base electoral del PJ (opción posible, habida cuenta de los movimientos que exhibe la dirigencia justicialista y la perspectiva futura de desempleo estructural), obviamente el escenario de predominio electoral menemista puede tocar a su fin.

LA CONSTRUCCION OPOSITORA DEBE POLITIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES PRIORITARIAS; PRINCIPALMENTE EL DESEMPLEO.

No obstante, y en esto parece conveniente ser claros, las cuatro fuerzas reproducirían en la práctica la compartimentación en términos de representación electoral entre sectores medios y populares. División ésta, que fractura la capacidad de construir coaliciones electorales capaces de expresar intereses sociales consonantes con una estrategia de transformación y profundización democrática.

EL CTA ANTE UNA NUEVA ETAPA

Solamente si las organizaciones de carácter democrático son capaces de intervenir en el conflicto organizado las demandas sociales y expresándolas institucionalmente, será factible promover un realineamiento político que supere las formas estancas y compartimentadas de representación que hasta hoy se exhiben.

En este punto la capacidad de politizar la cuestión del desempleo asume un lugar principal.

Este desafío le impone una etapa absolutamente nueva a la construcción de la central. Si el paradigma democrático fue su partitura de nacimiento, la tarea principal a desarrollar radica en ser capaces de constituir una masa crítica de recursos (humanos, institucionales, económicos) que le otorguen capacidad de intervención en los conflictos concretos y que le permitan consolidar las estrategias que se desarrollan (Ej.: Marcha Federal, 24 de marzo, desocupación, etc.).

Debe destacarse que la capacidad de resolver por vía de la afiliación directa y el voto, algunos de los límites que presenta el modelo sindical tradicional, si bien permitieron instalar la central, no resuelven la cuestión organizativa ni su capacidad de intervención cotidiana frente a los conflictos.

Dicho de otro modo, la afiliación directa permite que los que no integran estructuras sindicales y los que son parte de estructuras irrecuperables, se incorporen a un nuevo ámbito de representación.

Sin embargo, esto no resuelve de qué manera se organizan y trabajan a efectos de que el CTA efectivamente defienda sus intereses.

Parece indispensable poder resolver por parte de las organizaciones que integran el CTA el modo de garantizar:

- a) una mínima y elemental estructura financiera.
- b) un conjunto de recursos humanos orientados a garantizar los aspectos principales que requiere la gestión de todo conflicto. A saber:
 - desarrollo organizativo y gremial
 - aparato de defensa jurídica
 - aparato intelectual y de formación de cuadros

**EL CONFLICTO CENTRAL ES
EL DESEMPLEO.
EL DESAFIO: LA CONSOLIDACION ORGANIZATIVA.**

- aparato de comunicación y propaganda
- sistematización de las relaciones con otras instituciones

Esto supone que las organizaciones que lo integran consideren indispensable para poder mejorar su accionar y la defensa de sus propios representados, la construcción de una Central de nuevo tipo.

Algunas cuestiones abonan este rumbo:

- a) el agotamiento del ciclo político tradicional expresado en la gestión de los dos partidos tradicionales.
- b) las dificultades de vertebrar una fuerza política de nuevo tipo por una vía de lucha exclusivamente institucional.
- c) los límites que exhiben nuestras propias organizaciones en sus luchas sectoriales.
- d) la necesidad de promover un realineamiento político que pueda capturar la desagregación del PJ en orden a encauzar una estrategia de transformación.

Asimismo, parece indispensable, a efectos de promover el crecimiento territorial del CTA en los grandes centros urbanos, la capacidad e articular la experiencia de la central con una iniciativa político-territorial más amplia. En este sentido, la experiencia del CCTyP adquiere valor aunque resulta incompleta. Se requiere ser capaces de integrar en el plano social, tres expresiones notorias de militancia comunitaria de los últimos tiempos:

- Experiencias de Iglesia
- Experiencias de ONGs y otros movimientos sociales
- Experiencias de medios alternativos

Por otra parte, parece imprescindible articular en este mismo trabajo la práctica de tipo institucional ligada a los partidos políticos. Tanto a nivel de funcionalizar su militancia territorial como de articular estrategias comunes con sus expresiones partidarias y legislativas.

ORGANIZACION, GESTION Y CRECIMIENTO

En la etapa '91-'94 el CTA enfrentó la realidad social y política con una iniciativa entroncada en la demanda de un esquema productivo integrador de las economías regionales. La MARCHA FEDERAL fue la respuesta y la canalización de los conflictos regionales, que permitió a la vez instalar institucionalmente la nueva Central. En la etapa que comienza, creemos que el eje debe pasar por el tema del desempleo, y el desafío que la Central enfrenta es su consolidación organizativa y territorial. Esta dinámica permitirá la continuidad de nuestra presencia como instrumento social y organizativo, pero potenciando su desarrollo

y su poder de incidencia y operación en los conflictos.

Ser capaces de estructurar formas de organización de carácter multisectorial y plurales en términos partidarios, parece el mejor modo de potenciar una estrategia de organización de las demandas sociales y de canalización institucional. Parece ser el mejor modo de demostrar que lo que está en juego no es el posicionamiento de cada fuerza u organización frente al problema, sino que, de lo que se trata es de conjugar recursos de distinto marco de presencia política e incluso de resolución. Parece ser también, el mejor modo de resolver la tan mentada trampa en torno a la escisión entre ser capaces de gestionar el gobierno y ser oposición. Una estrategia de este tipo coloca la tarea de la "gestión" en el campo de la oposición. Ser capaces de unificar recursos para gestionar de mejor manera los conflictos y problemas concretos, puede otorgar la imagen de que somos capaces de "gobernar la oposición".

Sería una forma de demostrar que el problema de la gestión y el gobierno no radica en accionar un discurso y hacerlo compatible con el esquema de poder ya existente, sino en mostrar que somos capaces de gestionar la construcción de un nuevo poder en el escenario de nuestra comunidad. Esto, y no otra cosa, nos permitirá demostrar que podemos gobernar.

Ser capaces de promover estrategias de este tipo en los centros urbanos, parece ser el mejor modo de garantizar el crecimiento y la mayor afiliación al CTA. Sobremanera, esto se impone en el ámbito geográfico donde concentrarse una estrategia de desarrollo que pueda promover una fuerza política que reformule los limitados términos que hoy exhibe la representación electoral. Nos referimos, concretamente, al trabajo que debe encararse en el Gran Buenos Aires.

I CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS

- 1996 -

**MATERIAL DE TRABAJO
PREPARATORIO N° 2**

**EL CTA
UNA NUEVA CENTRAL
DE TRABAJADORES**

**Aportes para la construcción
de una nueva estrategia de
poder en la Argentina**



DOCE AÑOS DE DEMOCRACIA: TRIUNFOS POPULARES E IMPOSIBILIDAD DE GOBERNAR.

Luego de 12 años de gobiernos democráticos y asumiendo los avances indudables en término de respeto por los derechos y garantías individuales, resulta evidente que nuestro pueblo logró ganar elecciones pero que sin embargo no pueda transformar sustantivamente su realidad. El nuevo escenario institucional no supo quebrar la lógica corporativa que los grupos más concentrados de la economía argentina y los acreedores externos han logrado imponer desde el aparato del Estado. Por el contrario, el comportamiento faccioso de estos sectores han inducido niveles inéditos de concentración y tras nacionalización que han impuesto condiciones de regresividad absoluta en materia de distribución de los ingresos, que han afirmado desequilibrios regionales cada vez más profundos y que para su sostenimiento requirieron del deterioro y empobrecimiento creciente de la vida institucional, jurídica y cultural de nuestro país.

MENEM CIERRA UN CICLO

Esta singular asimetría entre recuperación político-institucional comunitaria y predominio cuasi-omnímodo del poder económico, a terminado por eclosionar tras la caída del gobierno radical (acorralado por los mismos sectores que potenció en su gestión) y la asunción del gobierno por parte del Partido Justicialista. El gobierno de Menem cierra en los hechos un ciclo caracterizado por el predominio político de dos partidos con indudable raigambre popular y a los que se le deben, por sus gestiones pasadas indudables avances en el terreno jurídico, político, cultura y económico. Avances que durante más de medio siglo hicieron de la Argentina un país con relaciones sociales complejas y donde las desigualdades o asimetrías más profundas eran resueltas por la vía de intervenciones estatales dirigidas a obtener mayores niveles de equidad comunitaria. Estas intervenciones, asentaban su vialidad en el respaldo que otorgaba una trama de organizaciones sociales y experiencias políticas, que reflejaban simetrías importantes entre los diferentes sectores de la sociedad. El desarrollo de los últimos doce años de democracia luego del genocidio dictatorial, demuestra hasta el hartazgo que este ciclo se ha cerrado. Definitivamente no hay nada que pueda ofertar el sistema político bipartidista que dominará todo el siglo XX en el país, en orden a sostener un proyecto social y nacional equilibrado y donde la comunidad argentina pueda constituirse bajo otra legalidad que la impuesta por el paradigma premoderno del dominio del más poderoso. Si una comunidad nacional es algo más que los negocios exitosos de un reducido número de conglomerados empresarios, lo es precisamente por que como comunidad en algún punto logra suspender el reino del mercado para dar paso a la legalidad de lo público y comunitario. De los equilibrios jurídicos por sobre las desigualdades económicas, de la pluralidad cultural por sobre la égida de la ideología dominante, de la equiparación de ingresos y oportunidades por sobre las diferencias de poder que exhibe la estructura económica misma. Si

la construcción política de una comunidad supone, entre otras cosas, restituir equilibrios entre actores en situación de desigualdad, es evidente que la experiencia bipartidista post-dictatorial demuestra que el sistema político argentino a perdido su sentido fundamental. Ha revelado además niveles de labilidad y fragilidad tales que permitieron una y otra vez, que los triunfos populares en las urnas se transformaran luego, en el marco de accionar institucional en expresión inequívoca de las clases dominantes abdicando de las tareas principales de constitución permanente de equilibrios sociales.

LA FRACASADA EXPERIENCIA BIPARTIDISTA DEMUESTRA QUE EL SISTEMA POLITICO ARGENTINO HA PERDIDO SU SENTIDO FUNDAMENTAL

EL ESTALLIDO PERMANENTE

Lo afirmado no es retórica. Se hacen estallar equilibrios de décadas cuando se desarticula el poder judicial para legitimar desde la obediencia debida, el punto final y el indulto, a los genocidas. Se hacen estallar equilibrios cuando se desmorona la legislación laboral protectora, convertida hoy en letra muerta.

Se desarticulan políticas de simetría comunitaria, cuando se suprime la capacidad regulatoria del Estado mediante la privatización de empresas públicas, en atención a las demandas facciosas del mismo poder económico que en el pasado contribuyera a su destrucción paulatina. Se silencian equilibrios culturales cuando no existen políticas específicas sobre medios de comunicación social masivo, con influencia creciente en el diseño de formas culturales comunitarias, y cuyo único límite es el autocontrol que fija la propia libertad de empresa.

PODER PARA GOBERNAR

La República Argentina hoy es una comunidad sin equilibrios. Con un Estado quebrado en su capacidad para restaurar comportamientos armónicos y con un sistema político que, en sus tareas de gestión institucional, demostró limitaciones evidentes a la hora de impulsar y garantizar equilibrios sociales elementales. Más aun, y de manera progresiva, la gestión político-insitucional se transformó en apéndice de los intereses facciosos de los grupos más concentrados de la economía nacional, cuya lógica pareciera atender a dominar todas las instancias de la sociedad: jurídicas, políticas, culturales y obviamente estructurales.

Así, los años transcurridos luego de la restauración democrática, nos dicen con claridad que es posible ganar elecciones, que es factible detentar el gobierno, pero que eso no necesariamente supone haber construido el poder suficiente para gobernar. Esto es así en tanto entendamos que gobernar de manera consistente con una estrategia de profundización democrática implica:

a) estar en capacidad de promover la participación de los distintos sectores sociales en el diseño de las políticas públicas;

b) garantizar la vigencia del Estado de Derecho recuperando los equilibrios elementales entre los tres poderes del Estado;

c) estar en capacidad de replantear el tratamiento de la deuda externa en orden a limitar las transferencias al exterior y a privilegiar el logro de márgenes crecientes de autonomía en la definición de las políticas públicas respecto a los condicionamientos que impone los organismos internacionales;

d) replantear el perfil productivo de la Argentina reformando la opción por la construcción de un país industrial, capaz de ampliar su mercado interno, mejorar su inserción exportadora incorporando cuotas crecientes de progreso técnico, equilibrar su balance de divisas y dinamisar la generación de empleo;

e) estar en capacidad de reformular el funcionamiento del Estado asentando su perfil tributario en quienes detentan capacidad contributiva y dirigiendo el gasto público y su poder regulatorio en orden a instrumentar políticas de desarrollo productivo ligadas a compromisos empresarios concretos, a garantizar estrategias de integración y equilibrio regional, a regular y replantear la intervención pública en las áreas de servicio y explotación de recursos naturales recientemente privatizados, a la construcción de un sistema público que privilegie el desarrollo científico y tecnológico, y a la reforma integral del sistema de políticas sociales con el objeto de transformar la educación en política de Estado y definir un umbral mínimo de calidad de vida por debajo del cual no pueda caer ningún argentino.

Si esto es gobernar, si este verbo es entendido como asumir la tarea de revertir las condiciones de regresividad distributiva y concentración de la economía que se impusieron en la Argentina hace 20 años, si se lo asocia con profundizar el orden democrático, es evidente que los argentinos no hemos gobernado.

**POR QUE DECIMOS QUE
LOS ARGENTINOS NO HE-
MOS GOBERNADO.**

LOS LIMITES DE NUESTRA PRACTICA POLITICA.

Es indudable que una situación como la observada en los últimos doce años de vida institucional, obliga a revisar las prácticas políticas que hemos desplegado y las estrategias de poder en las que las mismas se han asentado. 2 cuestiones que nos penetran profundamente constituyen a nuestro juicio las claves culturales que han maniatado nuestro accionar en los últimos tiempos. El despliegue del terror inaugurado en la Argentina en 1976 y el predominio del economicismo (consecuencia fundamental del paradigma neoliberal) paradójicamente instaurado en el mismo momento histórico. En este sentido, siempre es bueno recordar que fue en abril de aquel año (1976) cuando escuchamos que Martínez de Hoz (Ministro de dictadura) los primeros argumentos (hoy

retomados por el Ministro Cavallo) que vinculaban el desarrollo de la Argentina y su raudo ingreso al primer mundo con el despliegue de estrategias ligadas a la apertura, la desregulación y las privatizaciones.

EL PRINCIPAL GOBIERNO DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976

Indudablemente, el momento fundante de este efecto devastador sobre la conciencia y la cultura argentina es el genocidio dictatorial. El terrorismo de Estado, la capacidad de este para ingresar en nuestros hogares y definir sobre la vida y la muerte de cada uno de nosotros constituye la clave de este problema. Historia que, pese a que algunos pretenden considerar como superada, se actualiza sistemáticamente a través de declaraciones oficiales, definiciones de los distintos estamentos militares y decisiones institucionales como la obediencia debida, el punto final y el indulto.

El principal objetivo del golpe de marzo de 1976 fue quebrar aquel sujeto histórico que se configurara en nuestro país de manera extendida en términos de alianza total y con una identidad política, que si bien era dominante, estaba abierta a múltiples vertientes ideológicas. Un sujeto político que creyó que era posible transformar la realidad. Esa certeza es la que intentó demoler el golpe de Estado situando el problema de la transformación en el límite entre la vida y la muerte. El genocidio desplegado se actualiza en múltiples declaraciones y decisiones institucionales que, como el indulto, reproducen al extremo el impacto originario del terror, mutilan desde el plano simbólico y legal a nuestro cuerpos, pretendiendo imponer una suerte de aislamiento o repliegue individual de carácter absoluto, e intentando consagrar una fractura permanente entre lo que se siente y lo que se actúa. Se puede sentir la injusticia pero hay un límite preciso (que es la muerte) para actuar. El indulto actualiza el terror al definir que en esta sociedad hay algunos que tiene derecho a matar y otros a hacer muertos. Situación que se evidencia hasta el escándalo frente a la dinámica del gatillo fácil, al asesinato de Víctor Choque, Omar Carrasco, María Soledad, y tantos otros. Terror que se liga con los límites que durante estos años ha observado la práctica política, y que influyó en la vigencia de una concepción que asoció el mantenimiento de la democracia con la necesidad de entronizar la impunidad.

Sobre el marco impuesto por este terror fundacional, operan sobre la memoria de los argentinos otros fenómenos similares. El terror latente a una guerra perdida, el pánico de la hiperinflación y el terror actual del desempleo.

El temor al efecto devastador que sobre los bolsillos populares afirmara la hiperinflación, permitió convalidar el orden de la estabilización convertible pese a sus secuelas en términos de remate del patrimonio nacional, debilitamiento productivo, fractura social y desarticulación regional. A su vez, el temor al desempleo sienta las bases para transformar en rehēnes al conjunto de los ocupados, imponiendo la degrada-

**UNA LINEA HISTORICA:
REPRESION, HIPERINFLACION Y DESEMPLEO.**

ción permanente de sus condiciones laborales. En suma, la afirmación de una cultura del terror pretende imponer sobre los argentinos la vigencia de la sobrevivencia y el sálvese quien pueda como modo dominante en el conjunto social. Modo que por definición niega la construcción de todo lazo comunitario, asesina la práctica política al disociarla de todo móvil transformador y la vincula de manera progresiva, con estrategias de mero posicionamiento individual. La actualización del terror promueve una concepción política que asocia el mantenimiento de la democracia con la necesidad de convalidar estrategias que degradan la calidad de vida de los argentinos, que solo amplía los beneficios de los grupos económicos locales y los acreedores externos, y que consagran situaciones que manifiesta impunidad. Concepción esta que de consolidarse, amenaza con vaciar de sentido el propio escenario institucional.

SIN UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL NO HAY PLAN ALTERNATIVO QUE VALGA

En la Argentina de hoy el 90% de los debates finaliza demandando una propuesta económica como condición sine qua non para dar lugar, apertura y viabilidad a la construcción política. La "necesidad de un proyecto" es la abstracción tecnicista en la que queda situada las intenciones de múltiples experiencias sociales y partidarias que se plantean como alternativas al modelo en curso. Suele ocurrir que frente a los dramas de hoy se observan (desempleo, crisis provincias, represión policial, etc.) la reacción principal es la de presentar un PLAN ECONOMICO ALTERNATIVO. Sin descartar el aporte que esto supone para orientar nuestras demandas, lo cierto es que luego de una elección nacional quedan definidos distintos niveles de representación político-institucional, el único modo en que puede otorgarse viabilidad a una propuesta económica distinta es demostrando capacidad para gestar UNA NUEVA SITUACION POLITICO-INSTITUCIONAL que incorpore las demandas expresadas por los distintos conflictos. Ese es, por lo tanto, el objetivo principal. En realidad, la verdadera tarea que tenemos planteada radica en ser capaces de esforzar la apertura de espacios institucionales nuevos (que por ende alteren la relación de fuerza previa) a partir de los recursos de los que disponemos (medios, presencia institucional, fuerza organizada, etc.). El objetivo debiera ser lograr que las demandas implícitas en los distintos conflictos que no logren resolución en el presente marco institucional, puedan ser incluidas (por lo menos en parte) a partir de las modificaciones que en el plano de la representación política y social seamos capaces de promover. Por lo tanto, y a partir de lo expuesto, si bien las exigencias planteadas demandan del aporte técnico e incluyen obviamente la presentación de planes, supone una tarea política mucho mayor. El tema no es formular entonces, solamente, un "plan global alternativo", sino construir un marco concreto de resolución institucional que amplíe los niveles de representación establezca nuevos límites al accionar oficial, y sobre estas bases pueda otorgar estrategias puntuales de salida a las diferentes situaciones. Dicho de otro modo y redundando, no es enunciado un Plan Económico Alternativo como se afronta o resuelve un conflicto

sino gestando un nuevo marco institucional y de "presencia" a los intereses que el conflicto expresa.

Sin enunciar por ende, a la necesidad de profundizar los debates sobre alternativas económicas frente a un contexto mundial que exhibe severas dificultades, el modo dominante en que se ha instalado la discusión económica en la Argentina de hoy tiende a cerrarle el camino a la construcción de una utopía distinta y a reproducir el orden existente. En realidad, el economicismo reinante en nuestro país es, en este particular sentido, la consecuencia más notoria del predominio adquirido por el neoliberalismo durante los últimos veinte años.

La primacía de este paradigma ha permitido que las leyes económicas se ubiquen en el orden de lo natural y universal, no sujetas a discusión más que en sus matices. De este modo, el mejor discurso político es un buen discurso económico.

NO ES UN PROBLEMA TECNICO

Esta situación plantea dos dificultades:

- reenvía la discusión al terreno de los especialistas y técnicos ya que son estos los únicos habilitados a opinar sobre la temática principal. Se paraliza así la participación comunitaria, se instala el problema cual si fuese técnico, la gente es confinada al lugar del espectador. Luego reforzado al extremo por las tendencias dominantes en un mundo signado por una cultura de carácter mediático.

- da por supuesto que la construcción política de la organización social, requerida para dar soporte a una propuesta distinta, o bien no es necesaria o ya existe. Esta concepción le asigna un carácter exclusivamente técnico a la definición de un proyecto económico y social. Por lo tanto, resulta indispensable en este nivel, aclarar qué entendemos como proyecto económico. Esto supone, antes que un modelo que combina variables técnicas, una manera de organizar la sociedad, distribuir el poder y gestionar el Estado. La viabilidad de las actuales recetas del ajuste salvaje no radica en racionalidad técnica alguna sino que se funda, casualmente, en un proceso no económico: "el drástico reordenamiento social y la profunda redistribución del poder que se operara en nuestro país a partir de 1976, desde los sectores más débiles de esta comunidad hacia aquellos de mayor fortaleza y poderío". Sólo la desarticulación de la trama de poder comunitario que durante más de medio siglo supo construir la sociedad argentina y que se expresó en la fortaleza de sus organizaciones políticas y sociales, es lo que ha permitido diseñar el espacio apto para sostener y darle viabilidad efectiva al plan de exclusión que hoy padecemos. Así como la propuesta económica oficial es determinada por una práctica política que logró modelar la organización social, toda alternativa requerirá de construcciones en dicho terreno que sean capaces de sostener políticamente una propuesta distinta. Los reducidos márgenes de acción que exhiben las políticas públicas se explican por el alto grado de influencia que tienen en su definición los acreedores externos (bancos

privados trasnacionales) y los grupos económicos locales y extranjeros más importantes. La construcción de un Estado con autonomía frente a los poderosos exige de niveles crecientes de organización social y política de los más postergados. Más aun constituye el único modo de recrear un sistema político-institucional en capacidad de reponer equilibrios sociales jurídicos y económicos indispensables, y perdidos, para la sociedad argentina.

UN DEBATE CONFUSO

Dos ejemplos bastan para ilustrar el tipo de confusión que provoca el carácter abstruso y tecnicista que asume hoy el debate económico y por ende el político. Durante años el gobierno sostuvo la imposibilidad de incrementar los haberes jubilatorios ya que esto produciría un déficit insoportable en las cuentas públicas. Sin embargo, a partir de la privatización del sistema previsional el déficit se agigantó (según fuentes oficiales U\$S 3200 millones para todo 1996) ya que los aportes de los trabajadores van a las AFJP, mientras el Estado mantiene los mismos compromisos de pago. Más aún, esta situación se ve agravada por la política en vigencia de reducción de aportes patronales. El sistema dispone por ende, en el marco de la política oficial, de menos fondos para gastos equivalentes. La pregunta obvia es por qué el déficit asociado al incremento del haber jubilatorio no puede aceptarse y el déficit vinculado a la ampliación de la operatoria del sistema financiero, sí. Ocurre que en este último caso estamos en presencia de poderosos actores económicos (bancos extranjeros, grupos empresarios) constituidos a su vez como fuerzas sociales y en capacidad de influir sobre el sistema político institucional y las decisiones públicas. En el caso de los jubilados, no. El mismo ejemplo es aplicable al debate impositivo. Es evidente que resulta técnicamente más sencillo replantear padrones y catastros y elaborar un sistema impositivo fundado en la identificación de los 20 grupos empresarios más importantes, estableciendo un impuesto a la renta presunta y al patrimonio consolidado de dichos conglomerados, que perseguir hasta el último almacenero para garantizar una recaudación impositiva centrada en el consumo. Sin embargo, la teoría indica que estos últimos impuestos son los de "fácil recaudación". En ambos ejemplos la teoría económica convencional y dominante, nos presenta como un problema de gestión técnica lo que en realidad evidencia la desigual distribución del poder político.

Sintéticamente, el economicismo es un obstáculo a la construcción política en tanto transforma el debate de la Argentina en un problema de gestión que puede (y debe) ser resuelto por un mejor técnico, antes que en un problema de poder político que exige la configuración de un nuevo bloque social (alternativo al existente) como único modo de garantizar una gestión distinta de gobierno.

LA ILUSION DE LA CONSTRUCCION POLITICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

El análisis tendría una ausencia importante, si no incorporamos

LA TEORIA ECONOMICA DOMINANTE PRESENTA COMO UN PROBLEMA DE GESTION TECNICA LO QUE EN REALIDAD ES DISTRIBUCION DESIGUAL DEL PODER POLITICO.

en nuestra reflexión el impacto de LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA REPRESENTACION POLITICA. Desde siempre, el problema central de la teoría política moderna radica en dar respuestas a esta categoría: la representación. El acto de representar supone la existencia simultánea de un representante y un representado. La construcción de un sistema de representaciones (cuestión clave en el diseño de un sistema institucional) pone justamente en tensión la relación entre los dos términos del acto mencionado. Tensión que se expresa en el hecho de que la PRESENCIA DEL REPRESENTANTE se funda en la AUSENCIA del REPRESENTADO. La propuesta de organización del sistema institucional a través, exclusivamente, de los representantes afirma las tendencias más elitistas y autoritarias de la democracia moderna. Por otra parte, quienes entienden la profundización democrática por la vía de incorporar crecientemente mecanismos de presencia directa de los representados a los efectos de oxigenar el sistema institucional, se ubican en la opción inversa.

LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE SE FUNDA EN LA AUSENCIA DEL REPRESENTADO.

Es evidente que la potencialidad de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo influye directamente en esta histórica discusión. Lo hacen fundando un lazo nuevo de relación entre el referente político y la gente (los representados). Lazo que pasa por encima e incluso desplaza el papel y lugar de los viejos modos de representación. Una visión ingenua o inocente de este proceso explica a partir de esto, la caducidad de las formas partidarias y organizativas y señala el surgimiento de la video-política como clave de la etapa. En el extremo de estas concepciones se instala un criterio que transforma la construcción política en una estrategia de marketing sostenida apenas por un conjunto de asesores. La mayor o menor eficacia electoral de estos procesos se estrella normalmente contra el muro inexorable del poder constituido y la ausencia de novedad alguna en la construcción de un lazo social comunitario por parte de estas metodologías. Es decir, más allá de la voluntad de los actores que las impulsan se revelan débiles a la hora de exhibir poder social concreto para transformar las injusticias que caracterizan a nuestra sociedad. Hablamos de visión ingenua porque entendemos que no se observa la espectacular influencia que el mundo de la imagen (la televisión) establece sobre la cotidianidad de la gente.

El procedimiento de la TV define tres efectos fundamentales:

- contribuye a presentar el accionar político como parte del mundo del espectáculo, confiando a la gente en el lugar del espectador. Es decir, la sume de un rol de absoluta pasividad. Refuerza por ende la tesis de que solo los representantes deben actuar en el sistema político.

- garantiza un procesamiento de la vida social en el marco del repliegue individual. Uno discute en su hogar los contenidos que vierte el aparato de televisión. Por ende desplaza los ámbitos de discusión colectiva.

- suele anular la capacidad crítica al imponer, vía imagen, que solo es verdad lo que allí aparece.

Estos tres efectos se inscriben en un proceso mas global que transforma en inviable toda estrategia de poder orientada predominantemente a construir un nuevo lazo social sobre la base de presentar un referente que diga cosas importantes en un programa político de televisión. Decimos esto por que la capacidad de la televisión para influir en los comportamientos colectivos radica en el poder intervenir sobre los múltiples aspectos de la vida cotidiana proponiendo programas de distinto tipo: diversión, conocimiento, información, amor y también política.

Esto supone que toda intervención en el marco dominante de los medios solo puede ser efectiva en tanto sea acompañada de estrategias de intervención social que permitan discutir la cotidianeidad. El papel de las organizaciones sociales como ámbitos que puedan potenciar formas solidarias de dar respuesta a los problemas que se plantean (trabajo, salud, educación, etc.); que incrementen la capacidad crítica sobre la realidad que vivimos y que potencien esto en el marco de estrategias colectivas que reviertan las condiciones de pasividad, resulta en este sentido fundamental. No para negar el papel de los medios que consideramos fundamental, sino para desplazar los contenidos negativos que ciertas concepciones acerca de los mismos tiene la construcción de un sistema político. Por lo menos, en tanto el objetivo sean fundarlo en la presencia permanente de los representados.

En esta dirección, el aporte de las organizaciones sociales debe presentarse como un modo directo de intervención en la cotidianeidad popular en orden a garantizar nuevas bases para una cultura solidaria.

LA CONSTRUCCION DEL CTA COMO APOORTE PARA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE PODER EN LA ARGENTINA

El terror, el economicismo y el nivel particular de los medios constituyen claves fundamentales en el desarrollo de nuestras prácticas políticas.

El carácter asumido por estas, en muchas ocasiones de transformarse en estrategias de marketing sostenidas por un reducido núcleo de asesores y centrados en el lanzamiento de candidaturas, debe ligarse con las tras problemáticas planteadas en el capítulo anterior. Estos ha incidido en la afirmación de concepciones que tienden a restringir la práctica política a la sola contienda electoral y a considerar que las tareas propias de las organizaciones sociales no son parte de dicha práctica.

Más aun esto ha llevado a instaurar posturas que consideran que transforman la política en canal de expresión de las demandas so-

ciales no es conveniente e incluso resta votos. Resulta extraño pero en un contexto donde es evidente (luego de 12 años de democracia) que todo triunfo electoral es reprocesado en el marco de una relación de fuerzas sociales existentes y negativa para el conjunto de la comunidad, la práctica política dominante sólo parece circunscribirse al posicionamiento electoral.

Nunca más diáfano que, el hecho de que el gobierno del poder político del Estado deja afuera aspectos centrales del poder y pone en crisis por ende, todo intento de gobernar que pretenda reemplazar el inexorable rumbo establecido por el ajuste a perpetuidad. Consecuentemente, hoy más que nunca, se requiere de un sólido bloque social que por fuera del poder político del Estado, permita sostener las estrategias de gobierno. Si el oficialismo en sus distintas iniciativas muestra el aval de sectores sindicales, eclesiales, empresarios y financieros, una alternativa que se precie debe exhibir interlocutores en todos los campos del accionar social.

Sobre el escenario de la Argentina de los últimos veinte años, en el marco del terror y el economicismo neoliberal, se fue dibujando en nuestro país una estrecha concepción de la política que reproduce, de manera permanente, la fractura entre la cuestión político electoral y la cuestión social. Esto no es patrimonio de los militantes partidarios o de las organizaciones sociales. Se trata de una concepción que invade los diferentes campos y que se expresan tanto en opciones electorales huérfanas de inserción social, desvinculadas de los conflictos cotidianos y sin poder concreto: como en expresiones sociales huérfanas de influencia institucional y muchas veces proclives a reproducir prácticas clientísticas en su relación con el Estado.

EL PROBLEMA DEL PODER

Sacudirnos el terror y desplazar el economicismo constituyen dos pasos claves en la tarea de afirmar una nueva estrategia política en la Argentina. Para nosotros implica:

a) Asumir que gobernar la Argentina de hoy en dirección a una estrategia de profundización democrática y equidad social es, antes que un problema de gestión técnica, un problema de poder. Alude por lo tanto a la capacidad de restituir equilibrios elementales entre los actores que intervienen;

b) lo anterior supone que la tarea de gobernar descansa en la capacidad de recrear un nuevo bloque social que permita fundar un nuevo tipo de Estado, cuyo sentido como tal se define en su posibilidad de reglar el comportamiento de los más poderosos.

c) que por ende la posibilidad de gobernar se construye en las prácticas políticas y sociales que se generan con antelación a la propia ges-

ción de gobierno. El criterio que sostiene este argumento reside en que la única pauta de crecimiento para una fuerza política y social radica en demostrar capacidad para gobernar aún sin ser gobierno. Es decir, ser capaz de producir efectos en el terreno político, jurídico, institucional, ideológico y económico que de no haber mediado su presencia, no hubieran existido.

d) es vital para esto superar la concepción tecnicista, eminentemente discursiva y casi exclusivamente ligada a la contienda electoral, que caracteriza a la concepción política resultante del predominio del terror y el economicismo neoliberal. Supone reapropiarnos de los aportes técnicos, discursivos y de la necesaria estrategia electoral, en el marco de una concepción integral de la práctica política. Concepción donde la idea de práctica, asocia la política con la noción de trabajo productivo (de transformación) sobre un objeto específico. Este objetivo es la coyuntura o el momento actual, entendiendo a éste como el punto en que se condensan las múltiples contradicciones que atraviesan a la sociedad.

e) La importancia de vincular la práctica política con el conflicto social, radica en entender que en ellos se expresan los puntos de resistencia y las demandas de inclusión no contenidas en el escenario institucional. Entendiendo la conflictividad social de forma global y no economicista, la misma se constituye en referencia obligada para el diseño de formas institucionales que amplíen el proceso democrático. En la construcción de nuevos modos de representación político institucional (tarea principal de una fuerza política que quiere gobernar) el conflicto, así entendido, cobra un papel fundamental.

f) En el marco de las consideraciones precedentes la tarea política coherente con el objetivo de ganar electoralmente el gobierno para profundizar la democracia, consiste en ser capaces de organizar la demanda social y canalizarla institucionalmente. En este marco de absoluta amplitud, corriéndonos de toda consideración que suponga pensarnos como "centro" de construcción alguna, es que ubicamos el sentido que para nosotros adquiere la afirmación de una nueva central de trabajadores.

HACIA UN NUEVO ESQUEMA DE REPRESENTACION

La tarea de restituir en nuestro país equilibrios comunitarios indispensables supone el aporte, desde las organizaciones sociales, a un nuevo esquema de representación política. En el caso específico del modelo sindical tradicional, que dominó durante medio siglo las prácticas de organización y lucha de los trabajadores, su agotamiento es hoy incontrastable. La decrepitud y descrédito que rodea a buena parte de sus principales dirigentes, así como la obsoleta modalidad de organización institucional de cara a las transformaciones salvajes pero profundas que impactaron sobre los trabajadores argentinos, ameritan de por sí la creación de una nueva central. En efecto, hoy la CGT sólo expresa sus límites institucionales (inocultables frente a un país en

ORGANIZAR LA DEMANDA SOCIAL Y CANALIZARLA INSTITUCIONALMENTE.

profunda transformación) y sus notables complicidades con las políticas oficiales que transformaron a los sindicatos en lazos del poder político, haciendo de la CGT un despacho marginal del Estado menemista.

Por otra parte, las transformaciones sociales acontecidas, que fragmentaron profundamente la relativamente homogénea clase trabajadora argentina, no permiten imaginar la construcción de una nueva central de los trabajadores argentinos bajo el paradigma de la restauración o un simple recambio dirigencial. Debe pensarse en el marco de una apuesta creadora.

En razón de lo hasta aquí expuesto, una nueva central de trabajadores implica una apuesta organizativa en dirección a enriquecer la vida comunitaria nacional. Se trata de dotar de nuevas condiciones al escenario político institucional a los efectos de poder restaurar equilibrios sociales elementales, dando organización y textura institucional a las demandas de los trabajadores. En este preciso sentido una nueva central pretende aportar al desarrollo de aquellas tareas que el Estado y el sistema político tradicional han dejado vacantes: "dotar de mayor simetría a las relaciones sociales comunitarias hoy gobernadas por la lógica facciosa de un sólo actor social dominante: los grupos económicos más poderosos".

Entendemos esta iniciativa como un insumo parcial para una nueva estrategia de poder dirigida a construir un nuevo bloque social que garantice una gestión democrática de gobierno. Entendemos nuestra construcción como un aporte que sólo cobra sentido en el marco de una estrategia común con el resto de los actores sociales y políticos. En esta dirección se inscribe la estrategia desplegada en el marco del Congreso de la Cultura, el trabajo y la producción. Iniciativa que en conjunto con otras organizaciones sociales intentan motorizar estrategias políticas de carácter multisectorial y de signo definitivamente plural en términos partidarios.

Por otra parte, habida cuenta de la caducidad ya expuesta del sistema partidario tradicional para restaurar políticas públicas de equilibrio comunitario, el alineamiento partidario tradicional que signó medio siglo de prácticas sindicales en nuestro país, debe dar lugar a la autonomía de la organización de los trabajadores respecto al sistema político global. Nada justifica alinearse pues no existe hoy partido político alguno en capacidad, por sí sólo, de alterar la modalidad de gestión estatal del ajuste. Objetivo principal de toda central que se precie de representar a los trabajadores. Existen corrientes de opinión internas a los grandes partidos y nuevas fuerzas partidarias que deben ser objeto de vínculos autónomos por parte de la nueva central. En realidad y en este exacto sentido, la autonomía o el no alineamiento constituyen el principal aporte para potenciar la recomposición necesaria que incluso en el terreno partidario debe darse a efectos de conformar la coalición política y social que haga gobernable a la Argentina del tercer milenio.

EL CTA IMPLICA UNA APUESTA ORGANIZATIVA PARA ENRIQUECER LA VIDA COMUNITARIA NACIONAL.

I CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS

- 1996 -

MATERIAL DE TRABAJO

PREPARATORIO N° 3

**LA NUEVA ETAPA
EN EL DESARROLLO
ORGANIZATIVO DEL CTA**

**Aportes para la construcción
de una nueva estrategia de
poder en la Argentina**



Presentación

El próximo 4 y 5 de noviembre se realizará el primer Congreso Nacional del CTA donde cerca de 6.000 delegados de todo el país definirán en el plano organizativo e institucional los términos de una nueva central de trabajadores en la Argentina. Este hecho coronará la estrategia que iniciáramos en 1991 cuando le dijimos no a la unidad cegetista sellada en Parque Norte detrás de un modelo de entrega y exclusión; que continuáramos en Rosario y Corrientes; que afirmáramos en Parque Sarmiento frente a más de 2.500 representantes sindicales, y que el 6 de junio de 1995 institucionalizáramos eligiendo autoridades locales, regionales y nacionales a través del voto directo de más de 600.000 trabajadores.

Una estrategia fundada en la democratización del movimiento obrero y dirigida a consolidar una nueva forma de organización de los trabajadores capaz de restituir poder al conjunto de los sectores populares, excluidos hace tiempo del modelo cultural, político y económico que se aplica en la Argentina.

El retroceso y la creciente indefensión de los trabajadores frente a la degradación más absoluta de sus niveles de vida, no es sólo consecuencia del modelo que desde mediados de la década del 70 vienen afirmando los sectores dominantes en nuestro país. Es producto también de una crisis sin precedentes de la organización sindical en general. En esto radica parte de la causa que explica por qué los trabajadores son hoy más un número en una encuesta de desempleo que un actor colectivo en capacidad de influir en la elaboración, diseño e instrumentación de las políticas públicas.

Las causas de la crisis

La desindustrialización sufrida por la Argentina desplazó al asalariado formal y sindicalizado como eje predominante de los sectores populares. El crecimiento en los niveles de desempleo, la precarización de las relaciones laborales y el avance del cuentapropismo de subsistencia, derivaron en una alta fragmentación de la clase trabajadora. Como contrapartida, la reestructuración económica que impusiera a sangre y fuego la dictadura militar y que se consolidara durante la década democrática, promovió una concentración sin precedentes en un puñado reducido de grupos empresarios locales y extranjeros, produciendo un inédito desequilibrio en la relación de fuerzas sociales.

Estas transformaciones introdujeron una crisis irreversible en un sindicalismo acostumbrado a dar respuestas a las demandas de los trabajadores a partir de una sólida relación con el Estado y cuyo poder se sustentaba en la integración de una clase trabajadora mucho más homogénea, cohesionada en sindicatos únicos por rama de actividad con conducciones fuertemente centralizadas y verticalistas. Asimismo, el financiamiento histórico de la actividad gremial sostenido por el aporte de los asalariados era compatible con un escenario económico de mejor distribución de los ingresos y predominio del mercado interno.

Expulsado de la gestión estatal en lo que se refiere a dar respuestas a las demandas de los trabajadores; con sus bases sociales fragmentadas y dispersas, y con sus cuentas en rojo (y dependientes del subsidio estatal) ante el derrumbe de cotizaciones gremiales que siguieron el destino de la caída salarial y el retroceso en los niveles de empleo; se plantearon distintas opciones sindicales frente a la crisis, las cuales a comienzos de los noventa y en el marco del gobierno de Carlos Menem se expresaron con claridad.

Por un lado cierta dirigencia siguió el camino de la absoluta obsecuencia a las políticas oficiales como modo de reinsertarse en el nuevo escenario político-institucional. Nos referimos concretamente a las expresiones del menemismo sindical. Por otro, algunas organiza-

EL RETROCESO DE LOS TRABAJADORES NO ES SOLO CONSECUENCIA DEL "MODELO", SINO TAMBIEN DE LA CRISIS DE LA ORGANIZACION SINDICAL.

ciones entendieron que un modo eficaz de adaptar el sindicalismo al predominio de la lógica del mercado consistía en transformar a sus organizaciones gremiales en empresas. Ambas opciones renunciaron así a discutir el empleo, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. En el caso del menemismo sindical, recibiendo como contraprestación la posibilidad de disfrutar de las prebendas del gobierno y de transitar los despachos oficiales bajo el aplauso de los funcionarios. El sindicalismo empresarial por su parte, vio crecer su poderío económico. Encaró negocios ligados a la salud transformando sus propias obras sociales en prepagas médicas. Abandonó la lucha por la Previsión Social para transformarse en dueños, socios o comisionistas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Avanzó con criterio comercial en la hotelería, el Turismo y la recreación, y participó, incluso, del desguace del Estado viviendo una paradójica transformación: modificó su rol de representante laboral por el de expresión patronal.

El secreto de esta reconversión gremial, que transforma a los dirigentes de las organizaciones en ejecutivos de empresa, es que desvincula al sindicalismo de la lucha por el nivel de empleo y el salario de los trabajadores. Estos se convierten en cotizantes, clientes o usuarios de los servicios que brinda la organización, y desaparecen como sujeto social factible de ser representado para incidir en los destinos de la comunidad en la que habita.

Bajo el predominio que estas opciones tuvieron en la CGT durante los últimos años, las organizaciones gremiales vivieron una transformación sustantiva de su rol social. Si alguna vez el sindicalismo fue la correa de transmisión de las demandas de los trabajadores en las decisiones públicas, parte de su actual dirigencia asumió en esta etapa la tarea inversa de explicarle a los trabajadores las ventajas de soportar las políticas de ajuste, privatización y flexibilización laboral.

En definitiva, la crisis del movimiento sindical refleja en nuestra concepción no sólo el agotamiento de cierta dirigencia sino también del propio modelo de organización gremial. Modelo incapaz de expresar las nuevas realidades que presenta la clase trabajadora e inhibido de garantizar niveles crecientes de influencia institucional, que permitan la resolución favorable de los conflictos que esta atraviesa.

Por esta razón, y en este exacto sentido, para el CTA el problema no es sólo una cuestión de dirigentes. Se trata de discutir, proponer y construir un nuevo modelo sindical en nuestro país. Modelo que debe asumir los cambios y transformaciones que ha vivido la Argentina a efectos de dotar de una nueva forma de representación político-sindical a los trabajadores. Este es probablemente el punto que diferencia el planteo del CTA de la concepción de aquellos compañeros con los que hemos transitado el camino de confrontación con el actual modelo político y económico que expresa la gestión de Menem. Para nosotros, además de la confrontación política resulta indispensable asumir la construcción de un nuevo modelo sindical. Para decirlo sin rodeos. Las bases económicas y políticas que sustentaron el modelo sindical que primó en la Argentina desde la década del 40 en adelante, han desaparecido. Esto se traduce en concreto en la pérdida de relevancia del asalariado formal en el conjunto de los trabajadores. Categoría ésta sobre la que se construyó el modelo sindical tradicional. Por ende, este modelo de organización está herido de muerte e incluso su modificación más audaz (el sindicalismo empresarial) sólo puede sobrevivir en tanto asume la organización y representación de cierta elite asalariada, abandonando al conjunto de la clase. En este marco debe entenderse el desafío impostergable que el CTA plantea y asume en términos de la necesidad de innovar en las formas de organización de los trabajadores.

Hacia un nuevo modelo sindical

Frente a un modelo sindical caduco e incapaz de dar respuesta

FRENTE A LA CRISIS HUBO DISTINTAS ACTITUDES. ALGUNOS SINDICATOS SE SUBORDINARON AL GOBIERNO, OTROS SE CONVIRTIERON EN ESTRUCTURAS EMPRESARIAS. AMBOS SE ALEJARON DE LOS TRABAJADORES.

EL DESAFIO PASA POR LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODELO SINDICAL EN NUESTRO PAIS.

a las necesidades de los trabajadores, el CTA propone una nueva forma de construcción de la central obrera, fundada en la ética, la participación democrática y la articulación con la sociedad. En esta dirección, consideramos imprescindible que una central de trabajadores se haga cargo de la precariedad de las relaciones laborales instalada por el modelo dominante. Desocupados, asalariados interinos y cuentapropistas reflejan una parte importante de la nueva clase trabajadora.

A efectos de dotar de evidencia empírica lo que aquí afirmamos presentaremos cierta información que creemos de utilidad considerar.

La evaluación de las tasas de crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA, Población en condiciones de trabajar) entre 1970 y 1995, ratifica lo expuesto en párrafos anteriores respecto al significativo incremento de todos aquellos componentes de la fuerza de trabajo que no son incorporables organizativamente bajo los moldes del modelo sindical tradicional. Así el Cuadro Nro.1 exhibe con absoluta claridad que los desocupados (467%), los cuentapropistas (80%) y los trabajadores familiares sin remuneración (144%) tienen tasas de crecimiento muy superiores al promedio que muestra la PEA (56%).

LOS DESOCUPADOS SON EL SECTOR DE LOS TRABAJADORES QUE MAS CRECIO EN LOS ULTIMOS AÑOS.

CUADRO N° 1 • EVALUACION POR CATEGORIAS (Variación porcentual entre 1970 y 1995)

PEA	56,5
DESOCUPADOS	467
OCUPADOS	35
CUENTA PROPIA	80
TRABAJADOR FLIAR. S/REMUN.	144
ASALARIADOS (*)	18

(*) Casi todos precarios • Fuente IDEP

Por su parte, los asalariados apenas crecen un 18% en los veinticinco años considerados. Dato que al desagregarse evidencia que el grueso de las contrataciones de las últimas dos décadas se concentra en empleos de carácter precario.

La consecuencia de esta evolución da como resultado hoy el siguiente mapa de la clase trabajadora. Incluimos en éste el total de los trabajadores desocupados, el conjunto de los asalariados (formales y precarios), el crecimiento del cuentapropismo en los últimos 25 años, el incremento en los trabajadores familiares sin remuneración y los jubilados empobrecidos (Ver Cuadro Nro. 2).

CUADRO N° 2 TOTAL DE LA CLASE TRABAJADORA 1996

DESOCUPADOS	2.195.900
ASALARIADOS FORMALES	4.414.169
ASALARIADOS PRECARIOS	2.376.861
CUENTA PROPISMO DE SUBSISTENCIA	1.242.906
TRABAJADORES FLIARES. S/REMUN. (*)	387.278
JUBILACIONES EMPOBRECIDAS	3.118.550
TOTAL	13.735.664

(*) Incremento 70-96

Las cifras son elocuentes al reflejar que los asalariados formales son apenas el 41% de la clase trabajadora en actividad y el 32% si se incorpora a los jubilados. Porcentajes que disminuirán en tanto se mantengan las tendencias que caracterizaron a la Argentina en los últimos 25 años y que evidenciáramos en el Cuadro Nro.1.

A consecuencia de lo expuesto y tomando como referencia los últimos datos disponibles en materia de afiliación sindical surge que la sindicalización en el ámbito de los trabajadores en actividad asciende apenas al 30% del total. Si se considera a los jubilados, también se ubica en el 32%. Porcentajes ambos que reflejan los límites del accionar sindical tradicional para organizar a la nueva clase trabajadora argentina, y que refleja el descenso en los niveles de sindicalización respecto a los porcentajes que caracterizaban a nuestro país hace dos décadas.

A los efectos de dar cabida a estas manifestaciones de la realidad, el CTA plantea la afiliación directa e individual como modo de vinculación de todo tipo de trabajador (sea cual fuere su condición) con la central. Mecanismo éste, que intenta hacerse cargo de los niveles extremos de fragmentación que exhibe la fuerza de trabajo. Propuesta que pretende restituir en el terreno de la organización social, y en la expresión de sus derechos y dignidad, la orfandad en la que el modelo de exclusión ha sumido a parte significativa de la clase trabajadora. Afiliación directa que no se contradice con la incorporación plena de organizaciones sindicales, pero que permite estructurar también en torno a la nueva central a aquellos trabajadores cuyas conducciones han traicionado el interés de sus representados y que fundan su continuidad en la vigencia de estatutos-trampa, en el descenso de los niveles de sindicalización y en la desmovilización de los trabajadores.

La consecuencia lógica de la afiliación directa es el voto secreto de los trabajadores para la elección de autoridades locales, regionales y nacionales. Afirmar el protagonismo y dotar de la mayor legitimidad posible a las distintas representaciones, constituye un reaseguro para expresar con la mayor fortaleza la diversidad de situaciones que plantea la dramática realidad nacional.

No obstante, es conveniente ser consciente que si bien la afiliación resuelve el problema de la pertenencia a la organización, y el voto directo garantiza la democratización de la Central, el problema organizativo del CTA no se resuelve con estas dos definiciones.

Toda organización social debe ser capaz de organizar a sus representados en torno a los conflictos de intereses que estos deben afrontar, con el objeto de garantizar la mayor capacidad en el plano institucional en orden a que dichos conflictos se resuelvan de la manera más favorable. El desafío organizativo del CTA es entonces no sólo garantizar la democratización interna, sino también ser capaz de organizar las demandas que hoy tienen los trabajadores de manera eficaz a efectos de promover vías de resolución institucional. En este sentido, nuestro desarrollo organizativo actual demuestra que si bien estamos en condiciones de dar respuesta a las demandas de los trabajadores que afiliados a nuestra central tienen a su vez organización sindical, debemos superar nuestras limitaciones para poder brindar información y desarrollo organizativo a los afiliados individuales que actualmente representan aproximadamente el 25% del padrón total del CTA.

Esto nos exige abrir nuevas instancias organizativas que nos permitan diseñar ámbitos de trabajo donde puedan confluir tanto los trabajadores organizados sindicalmente como aquellos que se vinculan a través de otro tipo de organizaciones o individualmente con la central.

Si el criterio de organización debe estructurarse en función de los conflictos concretos en los que el CTA debe asumir la representación de los trabajadores, el primer dato a registrar es que la conflictividad hoy

LA AFILIACION DIRECTA PERMITE SUPERAR LOS LIMITES DE LA ORGANIZACION SINDICAL TRADICIONAL.

SE NECESITA BRINDAR INFORMACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO A LOS AFILIADOS INDIVIDUALES (25% DEL PADRON DE AFILIADOS DEL CTA).

adopta múltiples formas de expresión, donde el conflicto laboral es sólo una de ellas. En concreto, del mismo modo que se fragmentó la clase trabajadora y el asalariado formal dejó de ocupar el centro de la escena, la conflictividad hoy aparece dispersa y con múltiples expresiones.

En nuestra opinión la estructura organizativa que el CTA debe construir tiene que intentar superponer diferentes planos a efectos de hacerse cargo de esta diversidad.

Como primera aproximación nuestra propuesta de trabajo plantea estructurar nuestras áreas organizativas en torno a tres ejes de conflicto en los que de hecho los trabajadores se ven involucrados. Estos son:

- a) Eje territorial
- b) Eje relativo a la Actividad Económica y/o social
- c) Eje laboral

En torno a cada uno de estos ejes aparecen conflictos que reflejan demandas diferentes pero todas ellas ligadas a la vida cotidiana de los trabajadores argentinos. Por lo tanto cada uno de los ejes planteados debe desagregarse en función de las demandas principales que en torno a él se estructuran.

Así las cosas, la cuestión puede formularse del siguiente modo.

En lo territorial las demandas se plantean en torno a:

- trabajo
- salud
- educación y cultura
- comunicación y medios de comunicación
- tierra y vivienda

El criterio que desde el CTA promovemos y que en el plano territorial resulta apto para afrontar los conflictos es el desarrollo de un amplio accionar comunitario que permita conjugar el esfuerzo de las organizaciones sociales y políticas en el nivel territorial que corresponda (nacional, provincial y municipal). En dichas acciones además de acompañar las mismas entidades patronales (en general de pequeñas y medianas empresas), también participan organizaciones que por su carácter agrupan o desarrollan actividades con trabajadores. Resulta estratégico para el desarrollo del CTA entender que además de participar en el conflicto concreto debe intentar abrir ámbitos organizativos que transformen la relación con dichas organizaciones en un trabajo permanente y que contribuya a la afiliación al CTA de los trabajadores que en dichas organizaciones participan. Nos referimos a federaciones vecinales, asentamientos, movimiento de villas, movimiento de ocupantes, organizaciones que trabajan a nivel barrial con la problemática del empleo, la salud y la educación, estudiantes, etc..

Por ejemplo, las demandas en torno a los problemas del trabajo que se plantean en el ámbito territorial podrían agrupar tanto a la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) como a las ONG's que se dedican a promover experiencias de microemprendimientos. Ambos tipos de organizaciones podrían estructurar un ámbito común (Federación) cuyo objetivo sería la lucha por el trabajo en el terreno de la economía informal y la desocupación. Del mismo modo puede pensarse lo mismo en torno al resto de las demandas que hemos planeado ligadas al eje territorial.

En torno a **las actividades económicas y sociales** las federaciones a constituir podrían estructurarse en torno a las siguientes áreas o sectores:

- Agropecuario
- Industria
- Comercio y servicios
- Construcción
- Energía

TRANSFORMAR LA RELACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN UN TRABAJO PERMANENTE.

- Transporte
- Finanzas
- Seguridad Social
- Salud
- Educación
- Servicios Públicos Privatizados

Estas Federaciones (en línea con la experiencia reciente de la FETERA¹) deberían articular a los sindicatos estructurados con otro tipo de organizaciones. Puede ocurrir que en el desarrollo organizativo se combinen las experiencias territoriales con las ligadas a la actividad y puedan constituirse Federaciones que sinteticen ambas problemáticas. Por ejemplo, no sería descartable una tendencia donde los trabajadores de la Educación y la Salud organizados en sus sindicatos respectivos, puedan articularse con otras organizaciones y afiliados directos ligados a dicha actividad desde las demandas y reivindicaciones territoriales en esos mismos temas.

En torno al **eje laboral** la propuesta organizativa del CTA debe partir del reconocimiento de nuestra historia sindical centrada en la organización del sindicato por rama pero incorporando criterios organizativos nuevos ligados tanto a las nuevas modalidades que presenta el capital, como a las particularidades de cierto tipo de establecimientos. Es decir debe reconocerse la profunda heterogeneidad hoy vigente en la economía local. Proponemos entonces tres modos organizativos cuya prioridad será definida por los trabajadores en el accionar concreto. Estos serían:

- Rama de Actividad
- Grupo Empresario
- Pequeños y Medianos establecimientos

Cuando hablamos de grupos económicos nos referimos a la existencia de unidades hoy dominantes en el proceso de acumulación local y que presentan una inserción multisectorial y una lógica de funcionamiento articulada. Casualmente esto les permite estructurar un movimiento del excedente al interior de la unidad empresaria que ponga a resguardo al mismo de toda discusión gremial que pueda plantearse. La ausencia de una organización sindical que en el plano laboral se estructure en línea con la morfología que hoy presenta el capital, debilita al extremo la disputa gremial por el reparto del excedente económico generado. Las ganancias de Pérez Companc, Techint o Soldati, tienen que ver con su presencia en el sector industrial, en las empresas de servicios y en el campo financiero.

La organización gremial en capacidad de discutir con ellos debe unificar a los trabajadores de las distintas empresas pese a que pertenezcan a actividades diferentes.

Asimismo, dado el carácter transnacional y regional que tienen estos conglomerados, esto exige incorporar la posibilidad de diseñar estrategias conjuntas con organizaciones similares de otros países que permitan mejorar nuestra capacidad para gestionar conflictos en el plano local. Es obvio que en la fase de transnacionalización vigente, en el marco del Mercosur y con la relevancia que el capital extranjero y los grupos locales internacionalizados tienen en nuestra economía, este plano crecerá progresivamente en importancia.

La mención de la cuestión internacional obliga a precisar otra problemática que afrontan los trabajadores en el marco de la globalización. Un sector importante de trabajadores argentinos están hoy en el exterior configurando un nuevo tipo de realidad que es menester organizar y expresar. Los movimientos migratorios que afectaron a nuestros

¹ La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina agrupa en una misma estructura a sindicatos con personería, a trabajadores de sectores de la actividad organizados por otros gremios, a agrupaciones y organizaciones sin inscripción y a trabajadores individuales del área energética que se afiliaron directamente a la Central.

NECESITAMOS UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL QUE SE ESTRUCTURE PARA ENFRENTAR AL CAPITAL CON LA FORMA QUE HA TOMADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

países han sido modificados drásticamente. Al impacto de las dictaduras y el exilio como causas de las migraciones, se le agregan las acuciantes condiciones económicas impuestas por la globalización y los procesos de ajuste.

Esto exige promover el intercambio real y fraterno entre Centrales dirigido a profundizar los lazos de solidaridad entre los trabajadores de los distintos países superando la discriminación, la competencia y la xenofobia que impulsan los sectores reaccionarios.

En este marco debe tenderse a:

- Formar Casas de Trabajadores Argentinos del CTA en el exterior.
- Estructurar convenios con Centrales de los países correspondientes que posibiliten que los trabajadores puedan disponer de infraestructura en las distintas naciones y que promuevan políticas de organización y solidaridad con los migrantes.

Brasileños, paraguayos, chilenos, bolivianos y uruguayos constituyen para nosotros la prioridad en el marco de la creciente integración que propone el Mercosur. Estratégicamente los trabajadores de América Latina y el Caribe serán base de nuestro accionar y, por supuesto, las derivaciones de las tradicionales inmigraciones europeas y asiáticas que, indudablemente, conforman una parte de nuestra clase trabajadora.

La construcción de políticas respecto a la cuestión migratoria constituye así, una responsabilidad indelegable para un modelo sindical nuevo **de cara la siglo XXI**.

En el campo de las Pyme, ámbito donde prima la informalidad, también se requiere un accionar específico. Muchas veces el contexto adverso en el que operan las unidades de menor tamaño, descarga sobre los trabajadores los efectos de la crisis. Asimismo, las respuestas gremiales en tanto no tomen en cuenta las características de estos establecimientos pueden contribuir al cierre de los mismos. Por ende, una estrategia que combine la necesidad de colocar la prioridad en la preservación del empleo y lo articule con una demanda de políticas públicas, exige un tratamiento distinto (desde el punto de vista gremial) al que requiere la actividad en una gran empresa o en un conglomerado.

La necesidad de superponer los tres planos en nuestra estrategia organizativa y de incluir la dimensión transnacional, responde a que todos ellos con mayor o menor énfasis de acuerdo al caso, permiten afrontar los conflictos que se le plantean a los trabajadores.

Así, el plano territorial permite encarar la tarea de representar las demandas de los trabajadores relativas a la degradación de su nivel de vida y que hoy no se plantean en el ámbito laboral. Permite además este plano integrar a organizaciones locales que carecen de articulación nacional alguna.

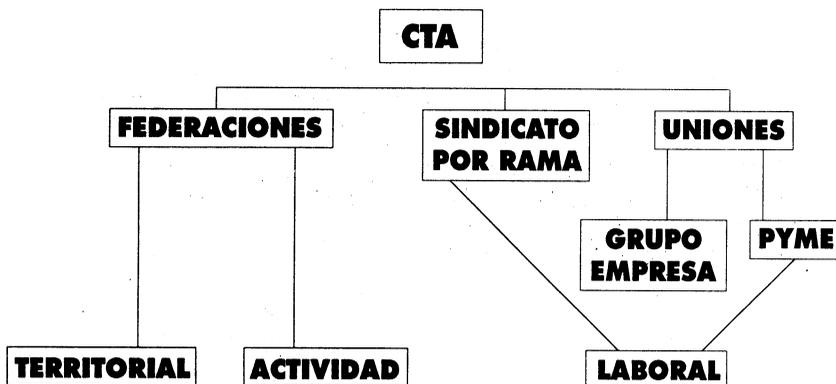
El plano de la organización por actividad suele ser importante a la hora de gestionar conflictos ligados a políticas públicas específicas. Por último, el plano laboral sitúa la organización sindical en el terreno tradicional de la disputa por el excedente económico generado y el destino del mismo. En este sentido la heterogeneidad de la economía argentina obliga a complejizar la organización gremial reconociendo los diferentes tipos de empresa. En concreto y redundando lo ya expuesto, es muy probable que mientras a nivel de un grupo empresario pueda tener sentido discutir el reparto de las ganancias, en el marco de las Pyme seguramente la preservación del empleo adopte un papel estratégico para cualquier discusión sindical.

El esquema organizativo planteado debería entonces ser el siguiente:

BRASILEÑOS, PARAGUAYOS, CHILENOS, BOLIVIANOS, URUGUAYOS Y ARGENTINOS EN UNA ESTRATEGIA COMUN EN EL MARCO DEL MERCOSUR.

a) Las **Federaciones** constituirían el marco para desarrollar los ejes territorial y de actividad.

b) Correspondería además, agregar **uniones de trabajadores por grupo empresario** y de pequeños y medianos establecimientos al criterio de **sindicato por rama** ya existente.



El CTA frente a la coyuntura

Los criterios expuestos intentan plasmar líneas de trabajo que permitan consolidar la organización del CTA. Se trata del trabajo permanente y sistemático que los militantes de nuestra organización deben encarar. No obstante cabe aclarar que esta tarea se hace siempre en el marco más general de la lucha social y política que se da en nuestro país. Frente a esto parece conveniente precisar los lineamientos de trabajo que viene planteando nuestra organización.

En el plano de la relación con la CGT y con otras corrientes sindicales, el criterio consiste en garantizar la unidad de acción en orden a favorecer la mejor resolución de las necesidades de los trabajadores. Bajo ningún concepto el CTA puede permitir que una disputa de siglas, nombres o construcciones debilite la posibilidad de alcanzar dicho objetivo.

En un plano más general el CTA siempre ha promovido frente a distintos problemas concretos, estrategias de acción comunitaria de carácter multisectorial y plurales en lo político partidario. Entendiendo que esta modalidad es la que mejor organiza las demandas sociales y la que mejor las canaliza institucionalmente.

En este sentido, venimos impulsando junto a otras cinco organizaciones la conformación del Congreso de la Cultura, el Trabajo y la Producción. Ambito en el cual promovemos la integración de nuestro accionar junto a organizaciones estudiantiles y de pequeños y medianos empresarios.

En orden a la coyuntura concreta que atraviesa nuestro país, el CTA considera que el eje que debe aglutinar al conjunto de la oposición política y social debe ser la lucha contra la desocupación. La posibilidad de obtener de inmediato un conjunto de medidas que permitan paliar la emergencia social debe ser el tema central que el CTA instale en todos los Foros multisectoriales y multipartidarios que se planteen. Ser capaces de reorientar las distintas iniciativas sectoriales o políticas, así como también motorizar las nuestras en esta dirección, es el desafío principal de esta etapa política del país. Luchar contra la desocupación y en favor de la redistribución de los ingresos y la riqueza constituye el marco en el que debemos consolidar nuestra organización.